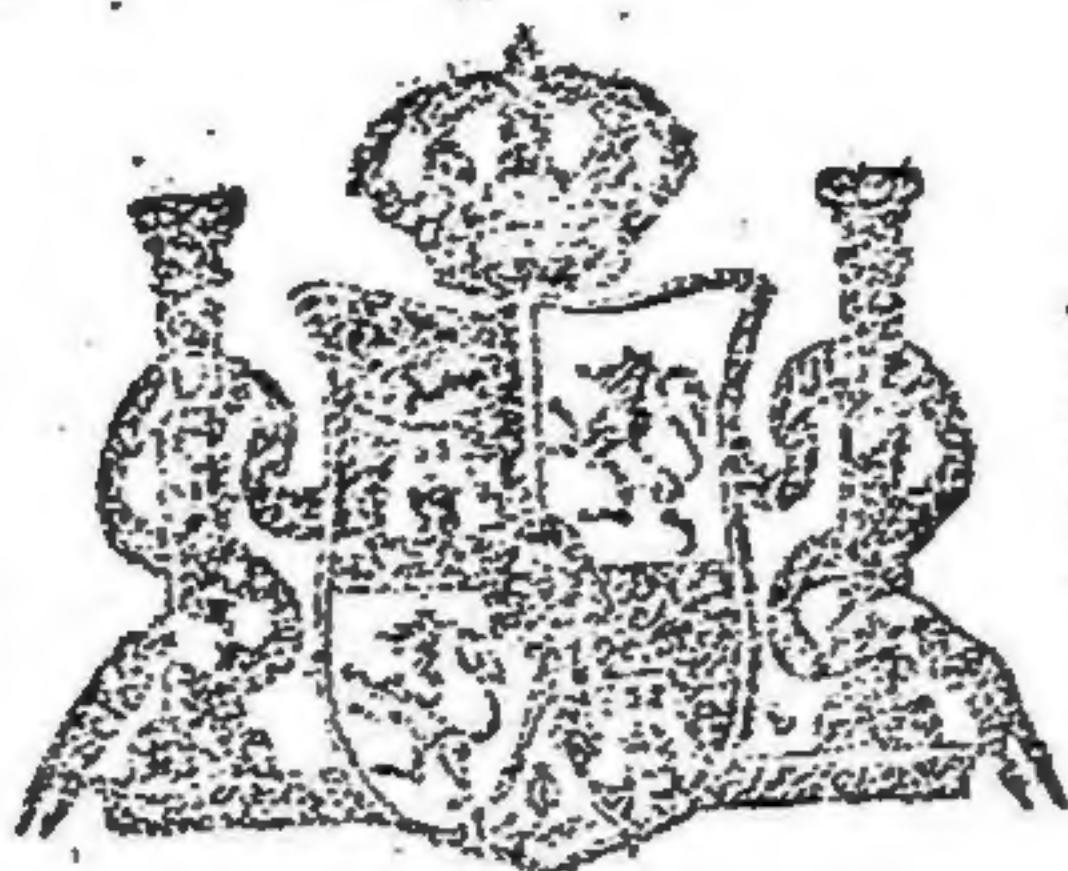


BOLETIN OFICIAL.



PROVINCIA DE ORENSE.

PRIMERA SECCION.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA.

DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. el Rey (Q. D. G.) continúa en esta Corte sin novedad en su importante salud.

La Serma. Sra. Princesa de Asturias, y las Sermas. señoras Infantas Doña María del Pilar, Doña María de la Paz y Doña María Eulalia, y los Serenísimos Señores Duques de Montpensier, continúan sin novedad en su importante salud.

(Gaceta núm. 182).

REAL DECRETO.

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de Granada y el Juez de primera instancia de Alhama, de los cuales resulta:

Que D. Federico Gironda, como cesionario de D. Miguel Castillo, adquirió dos redondas ó trozos de tierra procedentes del Estado, en la Sierra de la Mora y término de Arenas del Rey, de los cuales se dió posesion por la Hacienda al expresado Gironda en 10 de Junio de 1876, bajo los linderos con que las indicadas fincas se anunciaron en el *Boletín oficial de la provincia de Granada*:

Que en el mes de Setiembre del año antes expresado de 1876 el mismo Gironda arrancó los mojones que separaban una de las redondas adquiridas del Estado de otros terrenos pertenecientes á los herederos de D. Joaquín Moles Ro-

jo, y los colocó dentro de dichos terrenos, despojando á los dueños de una parte de su propiedad:

Que á consecuencia de este hecho los referidos herederos de Moles acudieron al Juzgado de primera instancia con un interdicto de recobrar la posesion de sus tierras que venian disfrutando por muchos años, y en la cual habian sido perturbados por D. Federico Gironda:

Que sustanciado el interdicto y citadas las partes para el juicio verbal, Gironda confesó haber variado los mojones; y seguido el procedimiento por todos sus trámites, se dió sentencia restitutoria, que fué notificada á las partes, y apelada por Gironda ante la Audiencia del territorio:

Que en su vista D. Federico Gironda acudió al Jefe económico para que instara al Gobernador de la provincia á fin de que suscitara la oportuna competencia á los Tribunales de justicia, por tratarse de un asunto de que solo correspondia conocer á la Administracion:

Que el Gobernador, tomando en cuenta la pretension del Jefe económico, dirigió á la Sala de lo civil de la Audiencia de Granada el oportuno requerimiento para que se inhibiera de conocer en el asunto: fundándose en que no habia transcurrido el año y día desde que se dió al comprador la posesion de las redondas; y por tanto, no se hallaba aquel en quietud y pacífica posesion de las fincas vendidas por el Estado, cuando se dedujo el interdicto por los herederos de D. Joaquín Moles, y no podia estimarse este negocio sino como una incidencia de la venta, de que solo correspondia conocer á las Autoridades gu-

bernativas; y citaba el Gobernador el art. 173 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, art. 9.º del Real decreto de 10 de Julio de 1865, y el Real decreto de 14 de Abril último:

Que sustanciado el conflicto la Audiencia dió auto declarándose competente, fundándose en que la demanda entablada por los actores no recayó sobre porcion alguna de las redondas de tierra que el Estado vendió á D. Federico Gironda, ni afectó por lo tanto en lo mas mínimo los intereses de la Hacienda pública, y en que aun en el supuesto de que sobre los terrenos que incluyó Gironda dentro de los mojones que colocó en la hacienda que venian poseyendo los demandantes pudiera aparecer un título legítimo de dominio á favor del Estado, siempre habria necesidad de suscitarse una cuestion de propiedad ó de plena y defendida posesion, cuyo conocimiento seria de la competencia de la jurisdiccion ordinaria:

Que el Gobernador, de acuerdo con la Comision provincial, insistió en su requerimiento, resultando el presente conflicto, que ha seguido sus trámites:

Visto el art. 1.º de la Real orden de 20 de Setiembre de 1852, segun el cual corresponde al conocimiento de los Consejos provinciales, ó del Real en su caso (hoy de Estado), las cuestiones contenciosas relativas á la validez, inteligencia y cumplimiento de los arriendos y subastas de los bienes nacionales y actos posesorios que de ellas se derivan, hasta que el comprador ó adjudicatario sea puesto en posesion pacífica de ellos, y al de los Juzgados y Tribunales de justicia competentes las que versen sobre el dominio

de los mismos bienes y cualesquiera otros derechos que se funden en títulos anteriores y posteriores á la subasta, ó sean independientes de ella.

Considerando:

1.º Que el presente conflicto se ha promovido con ocasion de haber alterado D. Federico Gironda los mojones fijados por la Hacienda pública al darle posesion de las dos redondas de tierra que compró al Estado, con cuyo hecho ha invadido las fincas colindantes pertenecientes á los herederos de D. Joaquín Moles:

2.º Que no se ha suscitado duda alguna sobre la designacion de la finca vendida por el Estado, puesto que el interdicto se dirige únicamente contra los actos del Gironda que alteraron los linderos con que la expresada finca se anunció para la subasta en el *Boletín de la provincia*, los cuales fijó la misma Hacienda al conferir al comprador la posesion de dichos bienes; de donde há lugar á inferir que los derechos que en el referido interdicto se ventilan no se refieren á actos posesorios dependientes de la subasta de las indicadas redondas de tierra, sino que emanan de títulos independientes de aquella correspondiendo por lo tanto á los Tribunales de justicia el conocimiento de tales cuestiones;

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno,

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Autoridad judicial.

Dado en Palacio á quince de Junio de mil ochocientos setenta y ocho.—Alfonso.—El Presidente de Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REALES ÓRDENES.

Remitido á informe del Consejo de Estado el recurso de alzada interpuesto por D. José García contra una providencia de V. S., que se declaró incompetente para conocer de un acuerdo del Ayuntamiento de Gozon, relativo á la construccion de ciertas obras y variacion de una servidumbre pública, la Seccion de Gobernacion de dicho alto Cuerpo ha emitido el siguiente dictamen:

«Excmo. Sr.: En cumplimiento de la Real orden de 13 del mes próximo pasado, ha examinado la Seccion el expediente promovido por D. José García contra una providencia del Gobernador de Oviedo, que se declaró incompetente para conocer de un acuerdo del Ayuntamiento de Gozon, relativo á la construccion de ciertas obras y variacion de una servidumbre pública.

El reclamante solicitó y obtuvo permiso del Ayuntamiento para reedificar una casa de su propiedad, sita en la villa de Luanco, de aquel término municipal.

Cuando ya estaban bastante avanzadas las obras, manifestó García al Ayuntamiento que se proponia abrir en la fachada Nordeste de la casa una tercera ventana ó tragaluz segun se habia proyectado en el plano aprobado por la corporacion municipal, obra de todo punto indispensable á fin de dar luz y ventilacion y evitar la humedad en las bodegas, y que para llevarla á cabo era necesario variar la rasante de un camino ó servidumbre pública.

El Ayuntamiento desestimó la instancia fundándose en que en el plano archivado en sus oficinas no figuraba el hueco que se pretendia abrir, y en que no se podia permitir la variacion de la rasante porque siendo ya el camino bastante pendiente habia necesidad en su caso de construir en él una escalera.

D. José García interpuso recurso de alzada ante el Gobernador de la provincia alegando el derecho que le asistia á consecuencia de la aprobacion de los planos que en su dia presentó, en los que estaba señalado el hueco que se pretendia abrir; y suponiendo que habian sido alterados los que obraban en las oficinas de la Municipalidad, protestó acudir donde correspondiera por este hecho.

El Gobernador, en vista de lo informado por el Ayuntamiento, que rebatió lo expuesto por D. José García, de acuerdo con el parecer de la Comision provincial, considerando que el asunto de que se trataba era de la exclusiva competencia de la Municipalidad por referirse á un permiso para edificar y variacion de una rasante de un camino; y teniendo asimismo en cuenta que es obligacion de las corporaciones municipales conservar las servidumbres públicas, y que no se habia cometido infraccion de ley, acordó declararse incompetente para conocer en el asunto, sin perjuicio

del derecho de que se creyera asistido el interesado para reclamar donde viera convenirle.

La Seccion conceptúa que esta resolucioin se halla arreglada á derecho.

En efecto, por mas que el reclamante repite en el recurso de alzada interpuesto ante el Ministerio del digno cargo de V. E. que se ha infringido el artículo 77 de la ley Municipal de 1870, 83 de la vigente, porque el primer acuerdo del Ayuntamiento aprobando los planos en que se señalaban las obras que ahora se pretenden verificar fué inmediatamente ejecutivo, es el hecho que el Ayuntamiento niega rotundamente que figuraran en aquellos tales obras, y el interesado no prueba su aserto.

Por otra parte observa la Seccion que se trata de una cuestion de policia urbana, y que los Ayuntamientos están obligados por la ley á cuidar y conservar todas las servidumbres del Municipio; y no habiéndose extralimitado el Ayuntamiento de este circulo de atribuciones, ni lastimado derechos adquiridos por un tercero, pudo tomar la resolucioin que estimara mas conveniente á los intereses comunales.

Opina, por tanto, la Seccion que se debe desestimar el recurso interpuesto.

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.) con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de Junio de 1878.—Romero y Robledo.—Señor Gobernador de la provincia de Oviedo.

(Gaceta del 22 de Junio.)

Excmo. Sr.: Las Secciones de Gobernacion y de Hacienda del Consejo de Estado han emitido el dictamen siguiente:

«Excmo. Sr.: con la brevedad que se recomienda en la Real orden de 27 de Mayo último, comunicada por el Ministerio del digno cargo de V. E. las Secciones han examinado el expediente promovido por el Ayuntamiento de esta Corte consultando algunas dudas con motivo de la circular expedida por la Direccion general de Administracion local en 6 del mismo mes, que tuvo por objeto dictar reglas para la mejor instruccion de los expedientes que promuevan los Ayuntamientos en solicitud de autorizacion para adicionar la tarifa oficial del impuesto de consumos con nuevas especies.

La expresada Corporacion, despues de hacerse cargo de la parte dispositiva de la circular, manifiesta que las tarifas de consumos y arbitrios de esta capital comprenden: especies gravadas por el Fisco y con recargo municipal, al tenor de lo concertado en el contrato de encabezamiento de 26 de Agosto de 1874, renovado por tres años por Real orden de 20 de Mayo de 1875, y de las modifi-

caciones introducidas á virtud de las leyes de Presupuestos de 21 de Julio de 1876 y de 11 de Julio de 1877; especies de comer, beber y arder no gravadas por el Fisco y sujetas á impuesto municipal en la forma y condiciones prevenidas en los artículos 136 y 139 de la ley de 2 de Octubre de 1877, y materiales de construccion y otros artículos que no son de comer, beber ni arder, incluidos en la tarifa en virtud de la autorizacion concedida, primero por el Gobierno en 18 de Agosto de 1874, y despues por decreto-ley de 1.º de Junio de 1875.

Deduca la misma Corporacion que la circular deroga, ó al ménos modifica el art. 139 de la ley Municipal, que da carácter ejecutivo á los acuerdos del Ayuntamiento y de los asociados para determinar las especies que han de ser objeto del impuesto de consumos: que en la tarifa aprobada por la Junta municipal de Madrid no pueden comprenderse los materiales de construccion ni los demás artículos á que se refiere el decreto-ley de 1.º de Junio de 1875, y que no le es lícito gravar la sal contra lo prevenido en el artículo 48 de la vigente ley de presupuestos.

Atendida la trascendencia del asunto, y deseando obtener una aclaracion que facilite la marcha ordenada en la fijacion del presupuesto de ingresos de esta Corte, la Municipalidad acordó, como lo verifica en su nombre el Alcalde Presidente, acudir á V. E. consultando los puntos siguientes:

1.º Si los artículos 136 y 139 de la ley municipal de 2 de Octubre de 1877 se consideran en vigor en todas sus partes, ó modificados por el art. 7.º de la ley de Presupuestos de 21 de Julio de 1876, respecto á la necesidad de solicitar autorizacion para gravar los artículos de comer, beber y arder que no estan comprendidos en la tarifa de la Hacienda:

2.º Si deben considerarse subsistentes las autorizaciones concedidas por el Ministerio de la Gobernacion desde 1.º de Junio de 1875 hasta la fecha para gravar los materiales de construccion y otros artículos que no son de comer, beber ni arder, y para el establecimiento de otros arbitrios sin limitacion de periodo determinado, ó si deben considerarse caducadas en el corriente ejercicio.

Y 3.º Si con arreglo á lo dispuesto en el art. 47 de la ley vigente de Presupuestos puede el Ayuntamiento, como medio preferible y si otra cosa en contrario no acuerda la Junta municipal, continuar recaudando como hasta aqui el impuesto sobre la sal á la entrada de la poblacion.

Cursada por conducto del Go-

bernador de la provincia la referida consulta en 11 del citado mes, la Seccion correspondiente de ese Ministerio ha emitido su opinion respecto de cada uno de los puntos consultados, de los cuales se harán cargo igualmente las Secciones del Consejo, en cumplimiento de lo ordenado por S. M.

La ley municipal de 20 de Agosto de 1870 reconoció facultades muy amplias en las Juntas municipales para el establecimiento del impuesto de consumos.

Esas facultades, que se hallan tambien consignadas en la de 2 de Octubre de 1877, que es la misma de 1870 con las reformas introducidas por la de 16 de Diciembre de 1876, han sufrido notables modificaciones por esta y por las generales de presupuestos del Estado del corriente y de otros años económicos.

Que tales modificaciones son hoy de ineludible observancia para los Ayuntamientos y las Juntas municipales, no cabe género alguno de duda, bastando para persuadirse de ello fijar la atencion en el art. 135 de la ley de 1877, que dice así: «Los gastos comprendidos en los presupuestos municipales serán cubiertos con los ingresos, recargos y arbitrios que autorizan esta ley, la General de Presupuestos del Estado y las demás disposiciones vigentes, sin continuar los Ayuntamientos en la obligacion de subordinarse estrictamente al órden establecido en el art. 136.»

Al tenor de este precepto no es posible desconocer que cuantas disposiciones han dictado las leyes de Presupuestos del Estado acerca del impuesto de consumos que no se hallen derogadas ó sustituidas por otras que sean entre sí incompatibles, así como las instrucciones generales del ramo, que por estimarse complementarias de aquellas leyes tienen igual eficacia, deben de respetarse y cumplirse en todas sus partes.

Ahora bien, por el art. 7.º de la de Presupuestos del Estado de 21 de Julio de 1876, se previno que los Ayuntamientos encabezados podian adicionar á la tarifa del Gobierno nuevas especies *previa aprobacion del Ministro de la Gobernacion*, oido el de Hacienda; y como semejante disposicion de carácter general y reglamentario no aparece desvirtuada por ninguna otra, es de imprescindible necesidad cumplirla si los impuestos á que se refiere han de tener todas las condiciones de legalidad.

En tal concepto, la instruccion dada por la Direccion general de Administracion local estuvo en su lugar y fué muy oportuna, en razon á haberse publicado en una época en que los Gobernadores de las provincias debian de estar ejerciendo la inspeccion sobre los pre-

La naturaleza eventual de los arbitrios, la mayor ó menor necesidad de establecerlos y la conveniencia de no cercenar á las Juntas municipales la integridad de sus atribuciones en la eleccion de medios para cubrir las obligaciones de los pueblos, no consienten dar á los arbitrios establecidos por la Junta municipal de Madrid

Está, por tanto, en las atribuciones del Ayuntamiento de Madrid como en las de todas las Corporaciones de su clase, incluir en sus presupuestos una partida de cargo por razón de la sal en la proporción de 0.75 de peseta por habitante, y otra igual de data por entrega á la Hacienda del importe de ese arbitrio, que, dados

Ultimamente, encargo y recomiendo á V. S. que estimulando

Total de servicios 41.

SÉTIMA SECCION.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA.

Don Valentin Villar, Secretario del Juzgado municipal de la villa y distrito de Castro Caldelas.

Certifico: que en este Juzgado penden autos de juicio verbal, suscitados á instancia de D. Francisco Rodriguez Barbeito, propietario y vecino de esta villa, contra José Perez Chauren, de oficio calderero y vecino de San Juan de Poboeiros, y actualmente residente en ignorado punto, sobre reclamacion de 250 pesetas, procedentes de empréstito de dinero á intereses, segun obligacion otorgada en esta villa; por virtud de cuyo juicio se dictó la siguiente sentencia:

«En la villa del Castro Caldelas á 11 dias del mes de Diciembre año de 1877: el Sr. Juez municipal de este distrito D. Javier Fernandez Rodriguez, habiendo visto la anterior acta de juicio verbal y diligencias preliminares, celebrado á instancia de D. Francisco Rodriguez Barbeito, propietario y vecino de esta villa, contra José Perez (a) Chauren, de oficio calderero y vecino de San Juan de Poboeiros en este término municipal, y actualmente con residencia accidental en la ciudad de Valladolid, y por rebeldia de éste, sobre reclamacion de 290 pesetas, que es en deberle, procedentes de empréstito é intereses vencidos y no satisfechos, en virtud de obligacion otorgada á su favor en esta villa, y sin perjuicio de lo mas que sea en deberle realizada que fuere la oportuna liquidacion, por autenti el Secretario de dicho Juzgado dijo:

Resultando que el demandado José Perez ha sido citado personalmente á medio de exhorto dirigido al Sr. Juez municipal del domicilio actual de aquél, con entrega del duplicado de demanda y señalamiento de día y hora para el juicio decretado á instancia del demandante, segun consta de las diligencias de cumplimiento obrantes á continuacion de dicho exhorto; sin que esto no obstante, haya comparecido, ni expuesto causal alguno que le obstase verificarlo:

Resultando que el demandante, vista la incomparecencia del demandado, pidió la continuacion del juicio de rebeldia de éste, lo cual se estimó por el Juzgado:

Resultando que dicho demandante para justificar su peticion, formulada en la papeleta inicial, produjo una obligacion menos simple otorgada á su favor por el demandado en esta villa, con fecha 4 de Mayo de 1874, concerniente á la cantidad de 600 reales recibidos á via de empréstito y con la retribucion de un 30 por 100 anualmente, exigibles á voluntad del demandante; y para

corroboracion de aquella suministró los testigos presenciales á su otorgamiento, quienes la reconocieron bajo juramento y hace unida á estos autos:

Considerando que el demandante á virtud del documento aducido y reconocido judicialmente por los testigos de su otorgamiento, acreditó cumplidamente el fundamento de su reclamacion:

Considerando que la incomparecencia del demandado hace presumir que éste no tiene escepcion alguna legal que proponer contra la demanda.

En mérito á todo lo consignado:

Falla: que debe declarar y declara rebelde al José Perez Chauren, y condena al mismo á la satisfaccion al demandante de la cantidad de 250 pesetas que le reclama en la papeleta inicial por el concepto de empréstito é intereses vencidos, sin perjuicio de la liquidacion de cuentas si la pidiere; y asimismo le impone á dicho demandado el pago de todas las costas y gastos causadas en este

expediente y sus preliminares. Y en atencion á la rebeldia de aquél, notifiquese la esta sentencia personalmente si fuere habido, y en su defecto cúmplase lo prescrito en el artículo 1190 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Asi por esta su sentencia definitivamente juzgando, lo proveyó, mandó y firma el expresado señor Juez, de que certifico.—Javier Fernandez Rodriguez.—Valentin Villar, Secretario.»

Y con el fin de que tenga efecto la insercion de la anterior sentencia en el Boletin oficial de esta provincia, á causa de no ser posible la notificacion de ella al demandado personalmente, á pesar de exhorto dirigido al Sr. Juez municipal de la Plaza de Valladolid, donde aquél residia, expido el presente con el visto bueno del Sr. Juez municipal, en la villa del Castro Caldelas á 1.º de Julio de 1878.—Valentin Villar, Secretario.—V.º B.º—Javier Fernandez Rodriguez.

JUZGADO MUNICIPAL DE ORENSE.

Nacimientos registrados en este Juzgado durante la tercera decena de Junio de 1878.

Días.	NACIDOS VIVOS.						TOTAL DE VIVOS.	NACIDOS SIN VIDA y muertos antes de ser inscritos.						TOTAL DE MUERTOS.	TOTAL general.
	LEGÍTIMOS.			ILEGÍTIMOS.				LEGÍTIMOS.			ILEGÍTIMOS.				
	Varones.	Hembras.	Total.	Varones.	Hembras.	Total.		Varones.	Hembras.	Total.	Varones.	Hembras.	Total.		
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	1	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1
23	»	2	2	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	2
24	1	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	2	»	2	»	1	1	3	»	»	»	»	»	»	»	3
27	»	2	2	»	1	1	3	»	»	»	»	»	»	»	3
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	1	3	4	»	2	2	6	»	»	»	»	»	»	»	6
Totales.	4	8	12	»	4	4	16	»	»	»	»	»	»	»	16

Orense 1.º de Julio de 1878.—El Juez municipal, Dr. Antonio Varela G. Vaamonde.

Defunciones registradas en este Juzgado durante la tercera decena de Junio de 1878 clasificadas por sexo y estado civil de los fallecidos.

FALLECIDOS.									TOTAL general.
Dias.	VARONES.				HEMBRAS.				
	Solteros	Casados	Viudos	TOTAL.	Solteras	Casadas	Viudas.	TOTAL.	
21	"	"	"	"	"	"	"	"	"
22	"	"	"	"	1	"	"	1	1
23	1	"	1	2	"	"	1	1	3
24	"	"	"	"	"	1	"	1	1
25	1	"	"	1	"	"	"	"	1
26	1	"	"	1	1	"	2	3	4
27	"	1	"	1	"	"	"	"	1
28	1	"	"	1	"	"	"	"	1
29	"	"	"	"	"	1	"	1	1
30	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Totales.	4	1	1	6	2	2	3	7	13

Orense 1.º de Julio de 1878.—El Juez municipal, Dr. Antonio Varela G. Vaamonde.

ANUNCIOS.

A LOS SRES. ALCALDES.

En la imprenta de este periódico oficial, calle de Colon número 16, se despacha el papel para la confeccion del repartio de la contribucion de consumos, como igualmente los recibos ta-lonarios para el cobro de dicho impuesto, al infimo precio de 3 reales ciento.

Los Sres. Alcaldes que tienen hechos sus pedidos pueden mandar recogerlos; y los que nuevamente deseen hacerlo se servirán avisar en tiempo oportuno.

LA BURSÁTIL

MADRID:

RELATORES, 26, PRINCIPAL DERECHA.

Compra al contado y á los mas altos precios de Valores Públicos, 27 1/2 de Bancos y Sociedades; de Doses de 29 á 31 por 100 y Treses; Personal; Ferro-carriles; Caja de Depósitos; Bonos del Tesoro; Cupones y Carpetas de intereses y de Inscripciones de Ayuntamientos; Requisa y del Empréstito de 175 millones; Recibos al 26; nueve Décimos y Residuos al 29 y títulos completos al 33 por ciento.

Préstamos sobre valores al 6 por ciento anual.

La correspondencia se dirigirá al Gerente de *La Bursátil* y los valores en certificado, para reembolsar su importe.

¡YA NO SE COSE A MANO!

LAS LEGÍTIMAS MÁQUINAS

"SINGER"

hacen, sin esfuerzo de quien las trabaja, mucha mas costura, mas igual y perfecta, en mucho menos tiempo que cualquier otra.

SE VENDEN Á PLAZOS.

desde 10 REALES semanales.

Así, cuando se paga un plazo de al máquina, esta ha dejado ya al interesado una utilidad muchas veces mayor que la cantidad desembolsada.

MAS DE 2.000 CASAS

ESTABLECIDAS EN EUROPA SOLAMENTE, para la venta de estas renombradas máquinas garantizadas.

"SINGER"

para modistas, zapateras, sastres, guarnicioneros, carpenteros, fabricantes de camisas, cuellos, puños, corsés, cortes de botinas, guarnecedoras, y para toda persona, en fin, que necesite coser cualquier cosa y en cualquier forma.

Pidanse Catálogos ilustrados, con listas de precios y las condiciones de venta á plazos, en el

DEPÓSITO DE ORENSE.

30, PAZ, 30.

ORENSE: IMP. DE J. M. RAMOS.